

076-1  
P O L I T I C A

PAMELA PEREIRA:

# "EL GOBIERNO OPTO POR LA CONFRONTACION"

Abogada, presidenta de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Fedefam, representó a la Agrupación ante la comisión gubernamental que elaboró el proyecto de reparación a los familiares de las víctimas de la represión y planteó allí su desacuerdo con ese cuerpo legislativo. Dice que los funcionarios actuaron en forma voluntarista y carentes de sensibilidad al despachar el documento al Congreso, sin tener en cuenta las observaciones que ellas les formularon.

**¿**Cuál es el sentimiento de la Agrupación después de haberse roto el diálogo con el gobierno?

-De una profunda indignación y conmoción. Ha sido tan sorprendente la conducta asumida

por el gobierno en este tema que no nos podemos desprender de la indignación. Esto sin perjuicio que la racionalidad no nos abandonará, porque esa ha sido nuestra conducta. Pero engañaríamos a la sociedad chilena que mostráramos que legitimamos este proyecto que es desastroso para los intereses de los familiares y la causa de los desaparecidos.

**-Pero ustedes sostuvieron reuniones previas con el equipo de gobierno que elaboró el proyecto. ¿Qué pasó?**

-Tuvimos varias reuniones con la comisión interministerial de subsecretarios, pero en concreto, para discutir el proyecto de reparación, hubo dos encuentros previos a la reunión final donde explotó el conflicto. En estas reuniones participábamos, por una parte, la AFDD, y, por el gobierno, subsecretarios y un conjunto de asesores de los ministros y de una Comisión de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno. Nosotros le hemos pedido al gobierno no tener multiplicidad de interlocutores porque eso complica más las cosas.

**-¿Quiénes participaron en esta última reunión?**

-El subsecretario Edgardo Riveros, Jorge Donoso, Domingo Namuncura, Gonzalo Meza, Bernardo Espinoza y Gustavo Villalobos, que son los asesores que mencioné anteriormente.

**-¿Cuáles fueron los puntos de fricción con el gobierno?**

-Nosotros hemos tenido una conducta coherente en esta materia que no es novedosa con lo que hemos mantenido durante estos años, pero al conocer el texto del proyecto, sin perjuicio que el gobierno no lo quiere mostrar, surgieron las controversias. Allí se establece que la Corporación de Derecho Público no tiene facultades para investigar el paradero de nuestros seres queridos; se toma la decisión de legislar sobre la muerte presunta que no es nada distinto a la que planteó en 1978 el ex ministro Sergio Fernández, pero que produce un efecto político engañoso para el país porque al aplicarse se da a entender que ya estaría resuelto el punto de los detenidos desaparecidos, lo que es francamente violento. Desde el punto de vista de los derechos patrimoniales prima un criterio absurdo respecto a la pensión de 1 millón 200 mil pesos para cada familia. Parece que al gobierno le da lo mismo que sea un grupo familiar donde hay cinco



hijos o donde hay uno. Finalmente una cuestión vergonzosa y humillante: el proyecto desconoce el legítimo derecho de las madres de los desaparecidos de contar con una pensión vitalicia y el concepto de pensión única mensual, ya que se aplican criterios técnicos para resolver el tema previsional.

**-¿Por qué no plantearon estas objeciones en las reuniones previas que sostuvieron con el equipo de gobierno?**

-En las reuniones discutimos un borrador que era para presentar al Presidente y que estaba bastante mal hecho. Todos -al menos nosotros lo creíamos- estábamos de acuerdo con el carácter que tenía este documento, pero en la última reunión nos dimos cuenta que los criterios allí establecidos pasaban a convertirse en definitivos. Nuestras observaciones ni siquiera estaban contempladas en este papel. Más bien nos fuimos más atrás.

**-¿Fue en esa oportunidad que pidieron una audiencia con el Presidente?**

-Efectivamente, lo hicimos a través de esa instancia que es nuestro conducto regular. Desgraciadamente el Presidente no nos dio respuesta.

**-¿A qué atribuye usted que se haya llegado**

a esta situación de quiebre de relaciones entre ustedes y el gobierno a menos de un mes de conocido el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación?

-El gobierno al parecer tiene hoy una conducta política distinta. Es un cambio negativo. Pareciera que hay cierto interés en desentenderse luego del tema de los derechos humanos. La traducción concreta es este proyecto, por eso no lo aceptamos. Los funcionarios que lo redactaron demostraron una falta de imaginación sorprendente, criterios de tecnicismo y falta de sensibilidad. Son ellos quienes deben asumir la responsabilidad del quiebre de relaciones, hasta ahora buenas, que teníamos con el Gobierno.

**-El ministro Correa al dar a conocer el proyecto en ningún momento señaló que con ello se terminaba la posibilidad de seguir investigando.**

-El texto del proyecto no establece la facultad de investigar a la corporación que se crea. Sólo nos pueden acompañar y prestamos asesoría desde el punto de vista jurídico y social o allegar antecedentes a la justicia. En estos años, nosotros fuimos asesores óptimamente, en este plano, por la Vicaría de la Solidaridad. No necesitamos asesores y si así fuese, preferimos elegirlos nosotros. No es necesario que el Estado gaste recursos en asesores para nosotros. Lo que sí es responsabilidad del gobierno y su compromiso, reiterado por el Presidente el 4 de marzo, es crear una instancia para investigar la suerte de los detenidos desaparecidos.

**-¿Cuál es el paso siguiente que darán para salir del impasse?**

-Todas las bancadas, después del discurso del Presidente, declararon que aprobarían con prontitud el proyecto de reparación, pero no sabían cómo se iba a plantear. Nosotros conversaremos con todos ellos en el curso de los próximos días y les daremos a conocer nuestras observaciones pidiendo su apoyo. También informaremos, a través de las embajadas, a todos los gobiernos amigos de Europa que solidarizaron con nuestra causa durante la dictadura de esta situación. Yo espero que el Congreso revierta esta desafortunada acción política del gobierno en esta materia. No sé si hay un compromiso político que desconozcamos. Preferimos seguir actuando con buena fe, aunque muchas veces en este país eso se confunda con ingenuidad. No puede ser que el gobierno haya preferido optar por la confrontación en lugar del diálogo en una materia tan delicada como ésta. ●